



OFICIO

S/REF.: Expedientes nº 00001-00075850
FECHA: 18 de mayo de 2023
ASUNTO: Datos sobre CIEs

DESTINATARIO: [REDACTED]

El día 13 de enero de 2023 tuvo entrada en esta Dirección General la solicitud de información efectuadas por el [REDACTED] a través del Portal de la Transparencia, con números de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

"2022 Cifras de personas internadas en cada CIE según sexo y motivo de ingreso:

- o Art. 58.3.b) LO 4/2000 por entrada ilegal en patera.
- o Art. 58.3.b) LO 4/2000 por entrada ilegal en vehículos
- o Art. 58.3.b) LO 4/2000 por entrada ilegal en buque.
- o Art. 58.3.b) LO 4/2000 por entrada ilegal por otros medios.
- o Art. 58.3.a) LO 4/2000 por prohibición de entrada tras expulsión administrativa.
- o Art. 58.3.a) LO 4/2000 por prohibición de entrada tras expulsión judicial.
- o Art. 58.3.a) LO 4/2000 prohibición entrada por otro Estado Schengen.
- o Salida obligatoria Art. 246.5) RO 557/2011 sustitutoria de expulsión
- o Art. 52.e) LO 4/2000 contratación trabajador no habilitado para esa ocupación
- o Art. 53.1.a) LO 4/2000 por estancia irregular.
- o Art. 53.1.b) LO 4/2000 por trabajar sin autorización de trabajo
- o Art. 53.1.f) LO 4/2000 por infracciones graves a la LO 1/92
- o Art. 53.1. f) LO 4/2000 infracciones graves LO 4/2015 Seguridad ciudadana
- o Art. 57.2) L. 4/2000 por haber sido condenado
- o Art. 57.2 LO 4/2000 en relación con art. 57.8) LO 4/2000 contra derechos del trabajador.
- o Art. 5) LO 4/2000, medidas de seguridad administrativas
- o Art. 89.1 CP. Expulsión judicial sustitución pena superior a 1 año
- o Art. 89.1 párrafo 1º CP expulsión judicial sustitución pena inferior a 6 años
- o Art. 89.1, párrafo 2º CP Expulsión judicial sustitución pena igual o superior a 6 años
- o Art. 89.2 CP Expulsión judicial sustitución pena superior a 5 años
- o Art. 89.5 Expulsión judicial tercer grado 3/4 partes condena
- o Art. 90.2 CP en relación con 96.3.2 Expulsión judicial libertad condicional
- o Art. 15.1 RO 240/2007 por razones de orden público
- o Art. 15.1 R.D. 240/2007 por razones de salud pública
- o Art. 54.1.a) LO 4/2000 actividad contra la seguridad nacional
- o Art. 15.1 RO 240/2007 por razones de salud pública
- o I y S: comunitario, por infracción orden público código penal
- o I y S: Comunitario, infracción contra la seguridad pública
- o I y S Comunitario, por infracción del orden público administrativo
- o I y S: condena judicial, Código Penal.
- o I y S: comunitario, infracción contra la salud pública

2022. Cifra de las distintas nacionalidades que tienen las personas internadas, desglosadas por sexo y CIE.

2022. Cifras de personas que salen de cada CIE, desglosada por cada uno de los distintos Centros de internamiento y según la causa:

- o Ejecución de la devolución o Ejecución de la expulsión

CORREO ELECTRÓNICO:

sggt.sggeneral@policia.es

C/ Rafael Calvo 33, 5ª Planta
28071 - MADRID
TEL.- 91 322 32 37
FAX.- 91 308 32 36



- Puesta en libertad antes de plazo por imposibilidad de documentar
- Puesta en libertad agotado el plazo máximo de internamiento
- Puesta en libertad por expulsión o devolución fallidas
- Puesta en libertad por orden judicial
- Puesta en libertad por razones médicas
- Orden administrativa
- Traslado a otro CIE
- Ingreso en prisión
- Fuga
- Fallecimiento

España. Evolución entre 2011 y 2022 de las cifras de:

- órdenes de devolución ejecutadas desde CIE y en total
- órdenes de expulsión ejecutadas desde CIE y en total

España. Evolución entre 2011 y 2022 del porcentaje de personas:

- efectivamente devueltas sobre el total de internadas en CIE.
- efectivamente expulsadas sobre el total de internadas en CIE.

2022. Cifra de las distintas nacionalidades que tienen las personas internadas, desglosadas por sexo y CIE.

2022. Número de personas ciudadanas de la Unión Europea que han sido internadas en cada uno de los CIE. Evolución de 2011-2022

2022. España. Cifra total de las personas conducidas a CATE u otros dispositivos de identificación distintos de las comisarías de policía tras su entrada en el territorio".

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20.4 de la LTAIPBG, el día 13 de febrero de 2023 se debería entender desestimada la solicitud por silencio administrativo. No obstante, conforme al artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, *"En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio"*.

En aplicación de este precepto, habida cuenta de que el retraso se fundamente en la cantidad ingente de datos solicitados por el peticionario en diversos expedientes, así como la complejidad de los mismos, este Centro Directivo ha resuelto conceder el **acceso parcial** a la información solicitada, adjuntándose en anexo por separado la información de la que se dispone.

En anexo por separado se adjunta la información que se dispone del año 2022 sobre cada CIE, significando que no se remiten datos sobre **nacionalidades** concretas de las personas internadas, ya que la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, aplicándose en esta parte de la información el **Artículo 14.1.c)** de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta limitación ha sido avalada por propio el Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones, citando como las más recientes **R/300/2021, R/299/2021, R/0258/2021, estableciendo un criterio claro al respecto**, manifestando en ellas que *"dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de*



España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida".

(...) "No debe dejarse de lado la situación de nuestro país respecto de la inmigración de carácter irregular. En efecto, no se desconoce la importancia de la presión migratoria que sufre España, en su consideración de frontera exterior de la Unión Europea, así como de la importancia de la adopción y puesta en marcha efectiva de políticas que favorezcan los flujos migratorios de carácter regular, así como la lucha contra la trata de seres humanos que, en ocasiones, están implicados en estas situaciones irregulares. Esta labor de vigilancia y control de situaciones contrarias a la normativa vigente en materia de inmigración y asilo requiere de la colaboración de los países de origen, tanto para la tramitación de los expedientes de expulsión como para la adopción de medidas que frenen la trata de seres humanos.

Teniendo esto en consideración, y especialmente la incidencia en la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la inmigración irregular y la trata de seres humanos que se derivaría del acceso a la información solicitada, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que no existe un interés superior que justifique que se proporcione la información".

En definitiva, (...) "puesto que el elemento clave de la solicitud de acceso es precisamente conocer la información por el país de origen, elemento que es el que puede acarrear los problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión".

En lo que respecta a la **evolución** de las órdenes de devolución y expulsión desde CIE, entre el 2011 y 2022, señalar que en el expediente **001-033387** ya se facilitó la evolución de datos desde el año 2009 al 2018; en el expediente **001-039759**, el año 2019; en el expediente **001-052073**, las correspondientes al año 2020, y en el expediente **001-064586**, las del año 2021; por lo que tan sólo se facilitan los datos correspondientes al año 2022. Señalar que los datos que se facilitan son salidas desde CIE con órdenes de devolución y expulsión, sin poder aportar datos de cuáles de estas finalmente han sido ejecutadas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA

Francisco Pardo Piqueras

